

ATILIO A. BORON*

DESPUÉS DEL SAQUEO:
EL CAPITALISMO LATINOAMERICANO
A COMIENZOS DEL NUEVO SIGLO

*No aceptes lo habitual como cosa
natural. Porque en tiempos de
desorden, de confusión organizada,
de humanidad deshumanizada, nada
debe parecer natural. Nada debe
parecer imposible de cambiar*

Bertolt Brecht

LA PREOCUPACIÓN CENTRAL de este artículo es el examen de las posibilidades y límites de un capitalismo democrático en los países de la periferia. Las principales tesis que enumeraremos brevemente pueden ser juzgadas como excesivamente pesimistas por un observador complaciente del escenario latinoamericano. Sin embargo, desafortunadamente, han sido rotundamente confirmadas por el devenir de los hechos históricos desde el último cuarto del pasado siglo hasta la actualidad.

* Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Profesor Titular de Teoría Política y Social en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Repasemos algunas de ellas sucintamente:

- la lucha por la democracia en América Latina, es decir, la conquista de la igualdad, la libertad y la participación ciudadana, es insostenible al margen de una lucha contra el despotismo del capital. Más democracia implica, necesariamente, menos capitalismo.
- el neoliberalismo remata en una concepción y una práctica profundamente autoritaria en la gestión de la cosa pública. Por eso el dilema neoliberal no es entre estado y mercado, sino entre democracia y mercado. Y sus representantes no vacilan en sacrificar la primera en aras del segundo.
- el predominio de facto de los intereses de las clases dominantes, derrotadas en la arena electoral pero triunfantes en las “alturas” del aparato estatal, ha quebrado las expectativas de justicia que grandes sectores sociales habían depositado en el naciente orden democrático. Las ominosas secuelas de esto no tardarán en hacerse sentir.
- los agentes sociales de la democracia no pueden aspirar a “democratizar el mercado”. En ese reino privilegiado de los intereses privados no caben los argumentos de la justicia distributiva.
- el capitalismo latinoamericano es tan reaccionario que aun las más tímidas reformas son percibidas como instancias catalizadoras de la revolución y, en cuanto tales, combatidas con ferocidad por las clases dominantes.
- el discurso del “realismo posibilista” es incapaz de transformar la realidad y termina glorificando el *statu quo*, consolidando las inequidades e injusticias estructurales de la sociedad y frustrando las expectativas populares en relación con la recuperación de la democracia.
- las políticas neoliberales provocan el progresivo vaciamiento de los nuevos regímenes democráticos. Estos se convierten en una pura forma y la vida social regresa al paroxismo de una situación “cuasi-hobbesiana” de lucha de todos contra todos, de “sálvese quien pueda”, que abre las puertas a toda clase de comportamientos aberrantes.
- el marxismo no es una colección de dogmas fosilizados y canonizados, cuyo “éxito” teórico y práctico se encuentra garantizado de antemano. Sin la praxis creativa de los hombres y las mujeres que son los hacedores reales de la historia, la noble uto-

pía diseñada por Marx puede frustrarse, y lo que hoy conocemos como “civilización”, replegarse a la más oscura barbarie.

Lamentablemente, el inapelable veredicto de la historia ha corroborado los pronósticos que formuláramos hace ya más de una década en torno al curso del desarrollo capitalista en nuestra región. No se trataba de un pesimismo visceral ni del perverso deseo de que las cosas “salieran mal” en el nuevo ciclo histórico que se iniciaba en América Latina con el advenimiento de las democracias. Dichas previsiones se fundaban en un análisis concreto de la naturaleza y dinámica de los capitalismo latinoamericanos que no permitía compartir las ilusorias predicciones formuladas desde el saber convencional de las ciencias sociales sobre el futuro de las nuevas democracias y el tipo de sociedad resultante de los procesos de reestructuración capitalista en marcha. Tal como lo hemos repetido en numerosas oportunidades, ese debate ha quedado saldado, no como producto de una polémica escolástica, sino como resultado de la vida práctica de nuestros pueblos.

En efecto, ya no quedan dudas sobre el significado y objetivo de las políticas neoliberales; tampoco en lo tocante a las limitaciones de la democratización iniciada bajo tantas esperanzas en los años ochenta. Los mitos que ocultaban las verdaderas intenciones de dichas políticas se evaporaron en el horno incandescente de la práctica histórica. Lo que antes eran previsiones teóricas y posiciones fuertemente combatidas por los representantes del pensamiento único dan ahora paso al penoso recuento del saqueo, al luctuoso inventario de las víctimas que han quedado en el camino, al desalentador balance del despojo de nuestras riquezas y el robo de nuestros sueños. El pseudo “reformismo” del Consenso de Washington quedó al desnudo, y cuando se disiparon los humos de la batalla y las ilusiones fomentadas por la propaganda difundida por las grandes agencias ideológicas del capital, lo que apareció ante nuestros ojos fue un paisaje aterrador: un continente devastado por la pobreza, la indigencia y la exclusión social; un medio ambiente agredido y en gran parte destruido, sacrificado en el altar de las ganancias de las grandes empresas; una sociedad desgarrada y en acelerado proceso de descomposición; una economía cada vez más dependiente, vulnerable, extranjerizada; una democracia política reducida a poco más que un periódico simulacro electoral, pero en donde el mandato del pueblo (palabra que, dicho sea al pasar, fue desterrada del lenguaje público y reemplazada por otras más anodinas, “la gente”, por ejemplo, o más engañosas, como la “sociedad civil” o la “ciudadanía”),

para no hablar de sus esperanzas y expectativas, es sistemáticamente desoído por las sucesivas autoridades que se constituyen después de los comicios; y por último, en un listado que no pretende ser exhaustivo, un estado en algunos casos acribillado por la corrupción y casi siempre penosamente impotente para lidiar con los desafíos de nuestro tiempo y para poner coto a la vocación antropofágica de los monopolios, el gran capital imperialista y sus aliados.

Atrás quedaron las ilusiones prolijamente cultivadas por los aparatos ideológicos del capital: tal como era de esperar, el famoso “derrame”, que según la teoría neoliberal descargaría pródigamente sobre los hogares de los más pobres parte de la riqueza acumulada por los más ricos, no se produjo. En su lugar, hemos visto un proceso sin precedentes de polarización social y económica y un fenomenal aumento en la concentración de la riqueza, que hizo que nuestros ricos se enriquecieran cada día más mientras abajo crecía aceleradamente el número de pobres e indigentes que se sumían en una privación sin antecedentes en nuestra historia. La apertura comercial, que supuestamente sería correspondida por una movida equivalente practicada por los países capitalistas desarrollados, terminó siendo un gesto autista, con catastróficas consecuencias en los niveles de empleo de nuestras sociedades. Las privatizaciones consagraron el saqueo legal del patrimonio público y su traspaso a grandes monopolios –¡en muchos casos empresas estatales de las metrópolis imperialistas!– que de ese modo se quedaron, a precio vil, con empresas y recursos que los países habían acumulado a lo largo de varias generaciones. Por último, la desregulación financiera, exaltada por el catecismo neoliberal como segura fuente de ingreso de capitales para nuestra región, convirtió a la mayor parte de las economías de América Latina y el Caribe en sucursales de un gigantesco casino mundial: el sistema financiero internacional¹.

No sorprende, pues, constatar la creciente desestabilización social de nuestros países y los preocupantes signos que hablan de la debilidad de sus reconquistadas democracias. Este es un dato que suelen pasar por alto quienes se conforman con una mirada sobre las apariencias y los aspectos más superficiales de la realidad. Un notable ejemplo de esta actitud se encuentra en los numerosos trabajos escritos por los equipos del Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que alaban la validez de las reformas económicas en América Latina

1 La expresión “casino capitalista” fue acuñada por la profesora Susan Strange (1986).

(Edwards, 1997). Lo cierto, en cambio, es que, más allá de los formalismos, las democracias latinoamericanas se han ido vaciando de contenidos. No por casualidad las diversas encuestas de opinión que se practican en la región registran el alto grado de frustración de los ciudadanos con los desempeños de los gobiernos democráticos. El escepticismo, la apatía y la indiferencia ante los dispositivos institucionales de la democracia crecieron sin pausa en los últimos años. De persistir este desencanto, será apenas cuestión de tiempo antes de que el mismo se extienda desde los gobiernos que se supone deben encarnar las aspiraciones de la democracia al régimen democrático en sí mismo. Este contagio será inevitable en la medida en que los gobiernos, con apenas ligeras diferencias entre ellos, se desentendieron de la suerte de los ciudadanos y concentraron sus esfuerzos en complacer las demandas de las minorías y de una rapaz plutocracia que se presenta como la concreción histórica de las conquistas democráticas y las virtudes del libre mercado.

La expresión política de esta insatisfacción ciudadana ha sido muy variada: va desde la insurgencia zapatista de Chiapas (1° de enero de 1994) hasta las formidables movilizaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina que derrocaron al gobierno de Fernando de la Rúa, y, luego, el masivo repudio que concitara en las elecciones presidenciales de Argentina, en abril de 2003, la tentativa de retorno de quien fuera el paradigma de las políticas neoliberales en la región, Carlos Saúl Menem. Otros hitos en este sendero fueron las insurrecciones indígenas y campesinas de Ecuador, que contribuyeron a desalojar recientemente al tercer presidente en ocho años; la protesta urbana en Perú, que precipitó primero la caída de Alberto Fujimori y que tiene ahora en jaque al gobierno de Alejandro Toledo, bendecido desde sus inicios por George W. Bush en persona durante su visita a ese país; las luchas de los trabajadores de la salud en El Salvador y las incipientes demostraciones populares en contra del Tratado de Libre Comercio en Guatemala y Nicaragua; la nueva insurgencia popular boliviana, vinculada a la lucha por el agua, la defensa de los cultivos autóctonos y las estratégicas reservas de gas y petróleo, y contra las políticas de infinito ajuste estructural promovidas por quien también dejó su cargo, el presidente Sánchez de Lozada; la aplastante derrota sufrida por el candidato del continuismo neoliberal en Brasil, José Serra, a manos de Luiz Inácio Lula da Silva, con un claro mandato popular, desafortunadamente todavía no honrado, para abandonar esas nefastas políticas; el ascenso y consolidación de Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela, legitimado por una interminable cadena de victorias electo-

rales a pesar de la conspiración urdida, con el beneplácito y apoyo organizativo y financiero de la Casa Blanca, por los sectores más reaccionarios y corruptos de la sociedad venezolana; la conformación de un impresionante movimiento de protesta en el México de Fox, *El Campo No Aguanta Más*, en contra de las políticas neoliberales promovidas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), y, más recientemente, la gran movilización popular en la Ciudad de México que forzó al gobierno a retirar los cargos del falso proceso legal iniciado contra López Obrador.

En las páginas que siguen procuraremos aportar una visión de conjunto sobre las transformaciones operadas en las sociedades latinoamericanas en los años recientes y que yacen en los cimientos de sus trémulas superestructuras políticas.

NATURALEZA Y ALCANCES DEL “REFORMISMO” NEOLIBERAL

La década del ochenta fue testigo de una verdadera oleada reformista que, de manera desigual, afectó a la casi totalidad de los países de nuestra región. Antes de presentar sus contornos más sobresalientes conviene, empero, detenerse brevemente para despejar una cuestión semántica para nada intrascendente.

Resulta que se ha convertido en un lugar común hablar de “reformas” para referirse a aquello que, en la tradición del pensamiento político occidental, responde mejor a la expresión “contrarreforma”. Hemos explorado este tema en otro lugar, razón por la cual no nos extenderemos ahora en esa consideración².

Bástenos con decir que en realidad las políticas llevadas a cabo en nuestra región, lejos de haber introducido “reformas” –esto es, cambios graduales en una dirección tendiente hacia una mayor igualdad, bienestar social y libertad para el conjunto de la población, tal como lo indicaría la palabra “reforma” en la tradición de la filosofía política–, lo que hicieron fue exactamente lo contrario: potenciar una serie de transformaciones que recortaron antiguos derechos ciudadanos, redujeron dramáticamente las prestaciones sociales del estado y consolida-

2 Una aceptación acrítica del contenido de dichas reformas prevalece en gran parte de la literatura convencional de las ciencias sociales. Dentro de este conjunto, las visiones más lúcidas se encuentran en Torre (1998) y en Bresser Pereira, Maravall y Przeworski (1993). La lucidez y sutileza de sus análisis no los exime, lamentablemente, de caer en un discurso que en el fondo termina ratificando, sobre todo en el caso de Torre, la legitimidad de las políticas de ajuste y estabilización llevadas a cabo en concordancia con el catecismo del Consenso de Washington. Una crítica a estas concepciones se encuentra en Boron (2000).

ron una sociedad mucho más injusta y desigual que la que existía al comienzo de la etapa “reformista”. Lo que ocurre es que la victoria ideológica del neoliberalismo se expresa, entre otras cosas, por un singular deslizamiento semántico que hace que las palabras pierdan su antiguo significado y adopten otro nuevo y, en algunos casos, como este, claramente antitético. En ese sentido, las “reformas” padecidas por nuestras sociedades en las últimas décadas fueron, en realidad, crueles “contrarreformas” y acentuados procesos de involución social.

Uno de los más militantes ideólogos de esta peculiar forma de “reformismo”, Sebastián Edwards, ex economista jefe del BM, brindaba una versión extraordinariamente optimista de lo acontecido desde los años ochenta: “A mediados de 1993, los analistas y medios económicos internacionales recibían las reformas hacia una política de mercado como un éxito y proclamaban que varios países latinoamericanos iban camino de convertirse en una nueva generación de ‘tigres’. Los inversores extranjeros se aproximaron rápidamente a la región y los consultores y estudiosos se apresuraron a analizar las experiencias de Chile, México y Argentina con el fin de aprender de primera mano cómo unos países que, sólo unos años antes, habían parecido no tener esperanza, se habían vuelto tan atractivos para el dinero internacional” (Edwards, 1997: 17). En función de esta peculiar apreciación, Edwards procede a dividir a los países de la región en cuatro categorías, como puede verse a continuación (1997: 18-19)³.

Pioneros, o primeros reformadores (reformas iniciadas a finales de los setenta y comienzos de los ochenta)	Bolivia, Chile, México
Reformistas de la segunda oleada (reformas iniciadas a finales de los ochenta)	Costa Rica, Ecuador ⁴ , Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay
Reformadores tardíos, o reformistas de la tercera oleada (reformas iniciadas en los años noventa)	Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela.
No reformistas	Haití, República Dominicana

3 Hemos alterado en parte los nombres de cada una de esas categorías a los efectos de reflejar con mayor nitidez sus principales características (Edwards, 1997: 17). Una primera edición de este texto apareció como un documento oficial del BM en 1993 bajo el título *América Latina y el Caribe. Diez años después de la crisis de la deuda* (Washington DC). En aquella versión, la precaución observada en relación al caso mexicano en 1997 no aparecía.

4 Incluido por nosotros, pues en la elaboración original de Edwards este país figura como “no reformista”, ignorando la significación que tuvo el proceso lanzado por el gobierno neoliberal de León Febres Cordero a finales de los años ochenta y la dolarización de la economía ecuatoriana a finales de la década del noventa.

El tiempo transcurrido desde la iniciación de estas “reformas” permite evaluar de forma más completa los méritos de los distintos “reformadores”. Ya no se trata de una discusión sobre la interpretación de uno o dos datos circunstanciales, sino de un análisis mucho más profundo, que permite identificar las tendencias de largo plazo que se han desarrollado al calor de las nuevas políticas implementadas desde el auge de las ideas neoliberales en los ochenta y noventa. Desde ya, cualquier análisis que se practique sobre esta larga serie de tendencias estructurales, incluso el más elemental, con cualquier metodología, arrojará un resultado que seguramente decepcionará a Edwards y a los ideólogos neoliberales: diez años después de tan jubiloso diagnóstico, nuestra región no ha producido un solo tigre económico, para no hablar de una entera generación de ellos.

Al referirse a los procesos de reforma que tuvieron lugar en Brasil, un “reformador tardío” según Edwards, Francisco de Oliveira anotaba que en realidad el nombre de “reforma del Estado” era un título que no guardaba demasiada correspondencia con la realidad. Al igual que lo ocurrido en otros países de la región, bajo ese pomposo nombre se ocultó una política mucho más pedestre: recorte brutal del presupuesto público, despido masivo de funcionarios del estado, y dramático recorte de los derechos laborales de los sobrevivientes. Vista en perspectiva histórica, a esto se ha reducido la tan mentada “racionalización” del sector público promovida por los gobiernos del G-7, el FMI, el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y llevada a cabo por los gobiernos de la región (Sader, 1996: 94-95). Pocos años después, sería el propio BM el que habría de lamentarse ante las deprimentes implicaciones de esta política. La destrucción del estado, promovida por el neoliberalismo a fin de hacer lugar a las dinámicas del mercado, fue tan lejos que al final de la jornada el aparato estatal necesario para hacer funcionar a los países, bajo cualquier sistema económico, no estaba más allí. En algunos países africanos, la decadencia del ya rudimentario sistema estatal post-colonial alcanzó un punto en el cual la gente del BM se percató, para su consternación, de que no había una única agencia pública capaz de organizar una distribución racional de la ayuda alimentaria proveniente de la cooperación internacional para luchar contra la hambruna. Los esclarecidos “hechiceros” del capital comenzaron a preocuparse por encontrar la forma de “traer de vuelta al estado”⁵.

5 Aquí parafraseamos el título de un conocido libro que se encarga de trabajar esta materia (Evans, Rueschemeyer y Skocpol, 1985). Por su parte, el BM también produjo

Las observaciones de Francisco de Oliveira son pertinentes para el resto de América Latina, en donde la necesaria e impostergable reforma del estado fue acometida por gobiernos dominados por un fundamentalismo neoliberal que los condujo primero a la satanización del estado y luego a su lisa y llana destrucción. Las consecuencias de estas políticas, promovidas por las así llamadas “instituciones económicas multilaterales” –eufemismo para designar al FMI, el BM, el BID y la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otras–, gracias a las condicionalidades que imponían a deudores exangües y en bancarrota, muy débiles para resistir las presiones extranjeras, fueron, por una parte, un dramático aumento de la exclusión social en la totalidad de los países de la región y, por la otra, un preocupante debilitamiento del impulso democrático que tantas esperanzas había suscitado en nuestros países desde la década del ochenta.

Este proceso tuvo lugar en momentos en que el estado como institución era objeto no sólo de ataques prácticos (como las privatizaciones, sus reducciones presupuestarias, el desmantelamiento organizacional y achicamiento, etc.), sino también de críticas de naturaleza doctrinaria en las cuales aquel aparecía como una institución insanalemente corrupta e inmoral dominada por políticos egoístas completamente separados de la búsqueda del bien público, una institución por “naturaleza” ineficiente en el manejo de delicadas cuestiones económicas y financieras y, como si lo anterior no fuera suficiente, plagada de propensiones populistas y demagógicas que era necesario erradicar a fin de asegurar el buen gobierno y la elaboración de políticas económicas válidas.

Sin embargo, mientras se llevaban a cabo estos ataques con renovado fervor, una suerte de “astucia de la razón” hegeliana devolvía a esa institución la “centralidad” e importancia que le era negada en otros terrenos. Así, su irremplazable contribución se vio paradójicamente reafirmada por una sucesión de “cumbres” gubernamentales que, sostenidas en la década del noventa y a contracorriente del *ethos* neoliberal predominante, subrayaban la necesidad de que los estados, y no los mercados, pusieran en marcha un amplio conjunto de políticas activas para combatir la pobreza (Copenhague), promover los derechos de la mujer (Beijing), controlar el aumento desorbitado de la

bajo el formato de uno de sus reportes anuales un libro sobre el estado, tal vez con el propósito de compensar su vicioso rol en la destrucción de esta institución en la mayoría de los países del Tercer Mundo.

población (El Cairo) o preservar la biodiversidad y el medio ambiente para las siguientes generaciones (Río de Janeiro). En todos estos casos, en los cuales se confrontaban graves problemas de diverso tipo de alcance civilizatorio, la bancarrota del neoliberalismo se hizo evidente al punto tal que hasta sus más acérrimos partidarios tuvieron que reconocer que la “magia de los mercados” no tenía la menor posibilidad de encontrar una salida positiva a las crisis analizadas en las cumbres, y que para resolver estos problemas lo mejor que podía hacerse era acudir a los estados.

Esta convicción, que socavaba silenciosamente al “anti-estatismo” neoliberal, adquirió perfiles aún más contundentes al ser ratificada por uno de los gurúes del pensamiento económico libremercadista, Peter F. Drucker. En un artículo publicado en el número conmemorativo del 75° aniversario de la revista *Foreign Affairs*, Drucker examina lo ocurrido con los estados nacionales en el contexto de la globalización y, luego de comprobar la “asombrosa resistencia” de aquellos a los influjos de esta, concluye que “el estado nación tiene todas las probabilidades de sobrevivir a la globalización de la economía y la revolución informática que la acompaña” (1997: 160). Descarta, de ese modo, una de las creencias más difundidas del pensamiento único de fines del siglo XX: la ilusión de la desaparición estatal, cuya influencia no sólo se extiende entre los intelectuales e ideólogos de la derecha sino que alcanza también a importantes franjas del pensamiento supuestamente contestatario y anti-*establishment*, como queda en evidencia en la reciente producción de Michael Hardt y Antonio Negri (Hardt y Negri, 2000) y John Holloway (Holloway, 2002)⁶.

En el caso argentino, esta tarea de destrucción fue cumplida al pie de la letra por sucesivos gobiernos, especialmente después de 1989. Le cabe, sin embargo, al decenio presidido por Carlos Saúl Menem el dudoso mérito de haber sido el verdadero campeón de esta cruzada neoliberal. En Argentina, la llamada “destrucción creadora” del capitalismo, tan exaltada en la obra de Joseph Schumpeter, se limitó exclusivamente al primer término de la ecuación: la destrucción estuvo a la orden del día, mientras que la obra de la creación se encuentra todavía en veremos. Algo similar ocurrió con las tantas

⁶ Hemos examinado en profundidad este tema en Boron (2002) y en nuestro artículo “Poder, ‘contra-poder’ y ‘antipoder’. Notas sobre un extravío teórico político en el pensamiento crítico contemporáneo” (2003a). Los autores aludidos remiten a sus obras de reciente publicación.

“terapias de *shock*” recomendadas *urbi et orbi* por el FMI para “solucionar” los problemas tradicionales de las economías latinoamericanas –y africanas, de Europa del Este, asiáticas, ¡etcétera! Abundaron los *shocks*, pero las terapias brillaron por su ausencia. En el caso argentino, el desmantelamiento del estado ha llegado tan lejos que ha dejado al país a merced de todo tipo de circunstancias: si se incendian los bosques naturales de la Patagonia, no hay recursos humanos y materiales para enfrentar la catástrofe, salvo elevar nuestras plegarias al buen señor. Golpeado por las pérdidas a causa de los incendios de 1996, el gobierno de Menem decidió crear un fondo especial para financiar el combate contra el fuego de la próxima temporada seca, descontando cinco millones de dólares del ya ridículamente bajo presupuesto de las universidades nacionales.

Otro ejemplo tan absurdo como el anterior lo proporciona el hecho de tener grandes extensiones de la provincia de Buenos Aires inundadas a causa de la falta de mantenimiento de las vías de desagüe de los ríos y lagunas pampeanas. Estos trabajos han sido postergados por años por la necesidad de asegurar el control del gasto público para pagar la deuda externa. Sin embargo, los “ahorros” obtenidos con esta inacción oficial originan pérdidas muchísimo mayores en la producción de una de las áreas agropecuarias más ricas del mundo. Pero este es un detalle menor que no perturba el sueño de los gobernantes, empeñados como están en lograr un ajustado “cierre de cuentas fiscales” que apacigüe las iras de los enviados del FMI y el BM y facilite la obtención de nuevos y aún más leoninos préstamos externos. Todo esto no sería tan grave si, al mismo tiempo, los voceros del neoliberalismo no se desvivieran asegurando que tamaña irracionalidad es necesaria para atraer las inversiones y reducir, o simplemente suprimir, los impuestos que podrían desalentar a las grandes empresas y las grandes fortunas a invertir en el país.

Fiel a esta creencia, el ministro de Economía argentino, Domingo Felipe Cavallo, quien como presidente del Banco Central durante el gobierno de la sangrienta junta militar “socializó” una deuda externa privada –¡no pública, sino privada!– cercana a los treinta billones de dólares, decidió –bajo el gobierno democrático de Carlos S. Menem– eliminar los “impuestos discriminatorios” que gravaban a las bebidas cola, el champagne y las alfombras de lujo. Como dicha iniciativa, aplaudida por los expertos neoliberales, implicaba una merma de unos trescientos millones de dólares anuales en ingresos tributarios, el gobierno propuso a cambio aumentar en dos años la edad

mínima de jubilación de las mujeres, de 60 a 62 años, y de ese modo aprovechar las supuestamente excelentes condiciones de salud y atención médica disponibles en la Argentina neoliberal para compensar los ingresos perdidos por la supresión de aquellos impopulares impuestos. Ejemplos tragicómicos como estos podrían multiplicarse *ad infinitum*, especialmente si se recuerda que el caso argentino, si bien fue el más radical, estuvo lejos de haber sido el único en la región. La verdadera “cruzada” que los gobernantes de nuestros países han emprendido en contra del estado, completamente satanizado por la ideología dominante, es un monumento a la irracionalidad, no sólo en términos sociales sino también en función de la propia lógica del desarrollo capitalista (Boron, 2003b).

Para resumir, el veredicto de la historia es inapelable. Las “reformas” neoliberales fracasaron rotundamente en tres aspectos fundamentales: no lograron promover un crecimiento económico estable; no consiguieron aliviar la situación de pobreza y exclusión social que prevalecía en nuestra región como producto del desplome del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y la crisis de la deuda; y, lejos de fortalecer las instituciones democráticas y su legitimidad popular, este modelo tuvo como consecuencia su debilitamiento y desprestigio hasta un nivel sin precedentes en la historia latinoamericana.

POLÍTICAS NEOLIBERALES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

En lo relativo al crecimiento económico, la *performance* del “ajuste” de las economías latinoamericanas a partir de 1980 difícilmente podría haber sido más decepcionante. El Producto Bruto Interno (PBI) creció a un ritmo anual medio de 1,7% en la década del ochenta, y de 3,4% en la siguiente. Dado que en el primero de estos períodos el crecimiento de la población se situaba en el 2% anual, esto significó una caída en el PBI por habitante de alrededor del 0,3% por año a lo largo de toda la década, con justa razón denominada la “década perdida”. En la siguiente, con la tasa de crecimiento poblacional un tanto más disminuida, apenas si se revirtió la tendencia, quedando el crecimiento del PBI *per capita* en una cifra cercana a un modesto 1,7% anual. Siendo positiva, esta magnitud equivale a menos de la mitad de las tasas de crecimiento del PBI *per capita* que prevalecían en la región en las tres décadas comprendidas entre los años de la posguerra y la crisis de mediados y finales de la década del setenta, cuando, según los diagnósticos del FMI y el BM, las políticas económicas en vigencia adolecí-

an de incurables defectos y conducían a los países de la región por el sendero del atraso y el estancamiento (CEPAL, 2002).

Según Edwards, los pioneros en el reformismo de mercado contaron con una ventaja: pudieron avanzar muy rápidamente en el terreno de las transformaciones estructurales. Esta afirmación se realiza sin abrir la menor discusión, por cierto que imprescindible, sobre el signo, o la dirección, de tales transformaciones. Es decir, sin examinar quiénes fueron sus beneficiarios y quiénes sus víctimas, para no hablar de una valoración más comprensiva que nos indique si finalmente estas “reformas” colaboraron en la construcción de una sociedad mejor o si, por el contrario, dejaron como legado una sociedad más injusta y desigual que la que la precediera. En cambio, nuestro autor no ahorra palabras para exaltar el caso chileno, al que eleva a la categoría de modelo para imitar, “porque comenzó las reformas en 1975, casi diez años antes que todos los demás” (Edwards, 1997: 20). Es por eso que en dicho país las reformas están muy avanzadas y han marcado casi todas las facetas de la vida económica, política y social. Por supuesto, Edwards no se pregunta si es bueno o malo para el bienestar general que casi todas las facetas de la vida chilena se encuentren impregnadas de la lógica mercantil. Tampoco demuestra la menor inquietud por examinar algo que no constituye un dato menor o anecdótico: el hecho de que las mismas hubieran sido iniciadas y perfeccionadas en el contexto de la más sangrienta dictadura jamás conocida por Chile, con más de tres mil personas asesinadas o desaparecidas y cientos en prisión durante casi dos décadas, seguramente un tema “político” sobre el cual un economista serio, entrenado en las mejores universidades estadounidenses, jamás debe explayarse. Además, Edwards pasa completamente por alto el hecho de que la aplicación de estas políticas –que comienza inmediatamente después del golpe de estado de Pinochet en 1973– desembocó en el fenomenal *crash* financiero de 1982, y que recién luego de 1985, nueve años después, la economía chilena retomó un sendero de crecimiento. Claro está que lo hizo al adoptar una política que se apartaba en algunos aspectos fundamentales de las recomendaciones del Consenso de Washington al instituir importantes regulaciones para controlar el flujo de capitales externos, preservar la gran minería del cobre –proveedora del sustento chileno según Salvador Allende– en manos del estado y reforzar la presencia del estado en aspectos clave de la vida económica mediante intervenciones altamente selectivas y eficaces. Por otro lado, las tierras confiscadas a los latifundistas años antes prevalecieron en manos

de sus nuevos dueños, dando lugar a la dinámica de una nueva clase media capitalista rural. Más aún: contrariando un mandamiento sagrado del Consenso de Washington, el tamaño del gasto público en Chile aumentó, mientras que en el resto de la región disminuía considerablemente.

México, por otra parte, que en una primera versión del libro de Edwards fuera también señalado como otro país en el cual las reformas neoliberales habían llegado a su madurez y se hallaban en vías de consolidación, aparece en la versión definitiva del año 1997 bajo luces mucho menos brillantes (Sader, 1996). Haciendo gala de la tradicional retórica pseudo-técnica y “valorativamente neutra” del saber económico convencional, Edwards apunta que “los acontecimientos sociales (¡sic!) de Chiapas a principios de 1994 y el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio han introducido ciertas dudas respecto a la dirección exacta en la que van a avanzar las reformas mexicanas durante los próximos 12 años” (1997: 20). Como si lo anterior fueran anécdotas sin importancia, Edwards prosigue su análisis impertérrito. Se soslaya, de paso, el papel jugado por esa verdadera “anexión económica” que experimentó México con el ingreso al NAFTA y que reforzó extraordinariamente la vulnerabilidad externa de su economía, sin duda otro dato anecdótico. ¿No sería prudente tomar en cuenta la elocuente coincidencia entre este proceso de reformas y la aparición de la guerrilla zapatista –no tan sólo un mero “acontecimiento social” sino un síntoma de la lacerante “deuda social” que aún hoy prevalece en México– y todo un conjunto de nuevos movimientos de protesta en contra de la verdadera eutanasia de los pobres y las pequeñas empresas ocasionada por el NAFTA, que sus empeños “reformistas” no lograron extirpar?

En todo caso, y prosiguiendo con el hilo de nuestra argumentación, los gobiernos reformistas habrían logrado, de acuerdo con esta visión “semi-oficial” del BM, despejar del camino hacia el crecimiento autosostenido los graves obstáculos que habían frustrado las expectativas latinoamericanas en las décadas precedentes. Sin embargo, una lectura más atenta –y menos voluntarista– de las cifras que el propio Edwards proporciona en su libro permite extraer otras conclusiones. En efecto, si bien en los años inmediatamente posteriores a la crisis de la deuda (1982-1986) la totalidad de los países de la región experimentó una dramática caída en las tasas de crecimiento del PBI *per capita*, el período posterior muestra variaciones muy significativas en el ritmo de la recuperación económica.

Sin duda, Chile logra a partir de 1985 salir de la fenomenal crisis en que había caído cuando adoptó con la fe de los conversos las nefastas enseñanzas de la Escuela de Chicago. Pero la acentuada recuperación económica de aquellos años no era sino la contrapartida del descenso a los abismos producido en 1982. En todo caso, preciso es reconocer que en los años posteriores esta tendencia se reafirmó para reflejar un nuevo dinamismo nacido de las renovadas condiciones en que se desenvolvía la economía chilena, que habrían de persistir hasta poco antes del final de la década del noventa. Luego, las tasas de crecimiento chilenas habrían de reducirse sensiblemente y, hasta el momento en que se escriben estas líneas, no han podido recuperar el impulso que exhibieran en la segunda mitad de los años ochenta.

El caso de Bolivia, en cambio, otro “pionero”, es bien diferente. Este país fue durante un cierto tiempo monitoreado y gestionado casi personalmente por uno de los máximos gurúes del neoliberalismo contemporáneo, el economista de Harvard Jeffrey Sachs. Fiel a su convicción de que cualquier actividad que emprenda el estado en la vida económica es contraproducente, deficitaria en términos de costos y una permanente tentación para la corrupción, Sachs no ahorró esfuerzos para lograr que el gobierno pusiera en marcha un programa económico que respondiera puntualmente a cada uno de los mandamientos del catecismo neoliberal⁷. No obstante ello, la tasa de crecimiento del PBI *per capita* en el país andino fue de apenas el 0,7% anual para el período 1987-1992 (Edwards, 1997: 18), al paso que datos más recientes de la CEPAL (2002: Cuadro 8), que abarcan el decenio 1991-2000, reflejan que dicha tasa para todo este período fue del 1,3% por año, muy inferior a la registrada por uno de los países que Edwards califica como recalcitrantemente “no reformador”, la República Dominicana, cuya tasa de crecimiento del PBI *per capita* para la década fue del 4% anual.

Comentario similar podría hacerse en relación con México, uno de los primeros reformadores y, en cierto sentido, uno de los ejemplos que permanentemente exhiben los economistas vinculados al BM y el FMI. El país azteca sale de la gran crisis de la deuda de 1982, gatillada precisamente por el *default* mexicano de agosto de ese año, con una tasa de crecimiento del PBI *per capita* para el período 1987-1992 del 1% anual. Pese a las optimistas expectativas de Edwards, durante el resto

⁷ En fechas recientes parecería que Sachs ha abjurado de sus antiguas convicciones.

del decenio el comportamiento de la economía mexicana hizo bien poco para avalar la presunta sensatez de las recetas neoliberales. Si en el período 1987-1992 el crecimiento mexicano fue sensiblemente inferior al experimentado por dos países hasta entonces refractarios al reformismo, como Colombia y Venezuela, con tasas del 2 y el 1,6% por año, las cifras del período 1991-2000 ilustran de forma aún más contundente las dimensiones de esta decepción. En efecto, y a pesar de las grandes expectativas abiertas con la conformación del NAFTA, el desempeño de la economía mexicana apenas alcanzó una tasa del 1,8% por año, que contrasta desfavorablemente con la de otros países mucho más escépticos ante las prédicas del Consenso de Washington, como la República Dominicana, que creció en ese mismo período a una tasa del 4%; Panamá, con el 2,7%; y Uruguay, en donde un plebiscito popular puso coto a la política de privatizaciones, con una tasa del 2,2%.

En conclusión, los datos que surgen de la experiencia reciente respaldan plenamente las tesis de los críticos del neoliberalismo. En este sentido cabe señalar que el pobre desempeño económico de la era neoliberal difícilmente pueda ser considerado como sorprendente. Raúl Prebisch advirtió, en un penetrante trabajo publicado en 1982, que lo que aparecía como una gran innovación en el terreno de la teoría y la política económica no era sino una reedición de añejas fórmulas ya ensayadas y fracasadas en el pasado. Decía el fundador de la CEPAL que después de décadas de haber sido marginadas de la escena pública mundial por su responsabilidad en la Gran Depresión de 1929, estas teorías neoclásicas regresaban al primer plano, metamorfoseadas ahora como neoliberalismo, catapultadas por la crisis del keynesianismo y el trauma de la estanflación en los setenta. En su primera encarnación estas tesis se condensaban en tres verdaderos “artículos de fe”:

- La tradicional teoría neoclásica postula la existencia de una división internacional del trabajo, basada en las ventajas comparativas de las naciones, producto del libre juego de la economía internacional, y al cual deben adecuarse los países de la periferia, les guste o no. Versión contemporánea de esta teoría: la globalización, fenómeno “natural” e irresistible ante el cual los gobiernos sensatos y realistas no tienen otra opción que inclinarse. En palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano, la división internacional del trabajo significa que algunos países se especializan en ganar mientras otros se especializan en perder.

- Formulación tradicional de la teoría: el estado debe ser prescindente, absteniéndose de interferir en la vida económica, salvo algunas intervenciones puntuales y ocasionales en infraestructura y otras empresas generales no rentables para los actores privados. Versión actual de la teoría: privatizaciones, reducción del gasto público, achicamiento del estado, desregulación de los mercados.
- Formulación tradicional: el patrón oro. En la actualidad, reemplazado por el patrón dólar y, en el caso argentino, por la convertibilidad sobre la base del “uno a uno”.

La crisis de 1929 puso un abrupto y traumático fin al predominio entonces indisputado de la ortodoxia neoclásica. Pero el agotamiento de esta teoría había sido precozmente apuntado por la penetrante, y solitaria, voz de John M. Keynes en un notable artículo corto escrito en 1926, unos años antes del estallido de la crisis: “El fin del *laissez-faire*”. Para superar la crisis, los gobiernos acudieron al proteccionismo, del que ya no se pudo volver, como claramente lo prueban las interminables negociaciones fallidas del GATT y la OMC. Por otro lado, la crisis instó a una redefinición radical y al mejoramiento de las funciones del estado en la acumulación capitalista, asistiéndose a una verdadera “estatificación” de este proceso⁸. Prebisch advertía infructuosamente que sería funesto tratar de regresar a un modelo de gestión macroeconómica que había demostrado su radical inadecuación para enfrentar los problemas del desarrollo ya en la década de 1920 y que además comportaba ingentes costos sociales y políticos que mal podían imponerse a la población en un contexto democrático sin infligir graves daños a la trama misma de la sociedad y a la legitimidad de los nacientes regímenes democráticos (Prebisch, 1982: 73-78).

EL HOLOCAUSTO SOCIAL PROVOCADO POR LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES

En relación con este tema, la evidencia histórica ofrece un veredicto no menos contundente. Lejos de ser portadoras del progreso social, las políticas neoliberales precipitaron un holocausto social sin preceden-

⁸ Uno de los análisis más perceptivos de este proceso de “estatificación” es provisto por Antonio Negri en “Keynes y la teoría capitalista del Estado en 1929” (1978). Paradójicamente, los recientes escritos de Negri no siguen esta línea de interpretación. Ver Hardt y Negri (2000) y mi crítica en Boron (2002).

tes en la historia de América Latina. Esto se tradujo en un aumento dramático de la exclusión social, la pobreza y la vulnerabilidad de amplios sectores de las sociedades latinoamericanas (Ziccardi, 2002).

En efecto, en el marco de las políticas neoliberales implementadas en toda la región, con la sola excepción de Cuba, en los años ochenta y noventa se observa una intensificación sin precedentes de la exclusión social y la pobreza. En su servil obediencia a los dictados del imperialismo, nuestros gobiernos no se contentaron con establecer una economía de mercado sino que, yendo más lejos, dieron paso a lo que Pierre Mauro denominara una “sociedad de mercado”, es decir, una sociedad en la cual los derechos ciudadanos son redefinidos y forzados a adaptarse a una lógica mercantil, produciendo por esa vía la desprotección de grandes masas de nuestras poblaciones. El paso de una economía de mercado a una sociedad de mercado está mediado nada menos que por la capitulación estatal y la bancarrota de sus capacidades de intervención y gestión, lo que coloca objetivamente al estado y a la sociedad como rehenes de las fuerzas del mercado, y a este en condiciones de desarrollar hasta el límite el darwinismo social que permite seleccionar a los más aptos y eliminar a los que no lo son: niños, viejos, enfermos, adultos no reciclables laboralmente, etcétera.

No hace falta aportar demasiados antecedentes en esta materia: los datos sobre los niveles sin precedentes de pobreza, exclusión social e injusticia y la explotación imperante en las sociedades latinoamericanas han conmovido inclusive a algunos de los espíritus más reposados y a las burocracias internacionales más conservadoras, como la del BM, por ejemplo. La insatisfacción ante los decepcionantes resultados del ajuste neoliberal se revela ya entre sus más decididos partidarios. Hacia finales de la década del noventa Joseph Stiglitz, en ese momento uno de los vicepresidentes del BM, proclamaba la necesidad de fundar un consenso *post-Washington* (Stiglitz, 1998). Pocos años más tarde, este mismo economista, rápidamente despedido por el BM debido al contenido de sus declaraciones públicas sobre las fallas de las políticas neoliberales, publicaría una serie de trabajos en los que demostraría, con base en una abrumadora experiencia internacional, que las recomendaciones del catecismo neoliberal no funcionan (Stiglitz, 2000; 2002). No sirven para salir de la crisis, para crecer, para resolver los problemas del flanco externo ni mucho menos para aliviar la deuda social. En la misma dirección se han movido, en los últimos años, si bien de manera un tanto más cau-

telosa, otros economistas otrora convencidos de la bondad del recetario neoliberal, como Jeffrey Sachs, por ejemplo.

Las consecuencias pauperizadoras de estas políticas fueron advertidas, ya al promediar la década del ochenta, por Agustín Cueva (1979). Atendiendo al paisaje social de América Latina, Cueva observaba la aparición y rápida generalización en nuestras sociedades de dos nuevas figuras sociológicas: el mendigo y el narcotraficante, síntomas evidentes de la descomposición social y las crisis económicas ocasionadas por las políticas del Consenso de Washington. Frente a esto, el pobre “o vive de la caridad del Norte”, decía Cueva, “o trafica con drogas”. Lo que caracteriza a las clases y capas populares, esos dos tercios o cuatro quintos que en América Latina quedan “fuera de juego”, es un profundo proceso de desintegración social. El tan mentado discurso del “fin de la clase obrera”, tan caro a algunos espíritus, lejos de reflejar la superación de la explotación de clase y la aparición de una nueva categoría de trabajadores asalariados, remite más bien a un proceso de pavorosa disolución de lo social y de repliegue hacia un ultra-individualismo que difícilmente pueda ser saludado como un tránsito hacia una sociedad mejor.

De proseguir estas tendencias, y si los gobiernos de la región no abandonan definitivamente el recetario del Consenso de Washington, este deplorable continuismo terminará transformando a nuestras sociedades en un símil del estado de naturaleza hobbesiano, una especie de guerra de todos contra todos en donde la supervivencia misma de la sociedad civil –comprendida, según la mejor tradición filosófica occidental, como el *vivere civile e politico* que Maquiavelo postuló como el sustituto para la guerra– será puesta en discusión. No es necesario ser extremadamente pesimista para concordar con Boaventura de Sousa Santos (2005) cuando nota la coexistencia de rasgos *hobbesianos* y *lockeanos* en las sociedades latinoamericanas: Hobbes para los pobres, Locke para los ricos. La destrucción –o radical debilitamiento– de la sociedad civil, que en su clásico estudio Karl Polanyi (1944) certeramente adjudicara a las fuerzas disolventes del mercado, es ya una realidad en la mayoría de los países de la región. La ruptura de los mecanismos de integración social y la progresiva desarticulación de la red de actores colectivos que en un pasado no demasiado remoto integraban la sociedad de clases en el capitalismo periférico han dado rienda suelta a profundas tendencias y actitudes antisociales. El individualismo anómico, el “sálvese quien pueda”, como patrón cultural emulador del individualismo patológico de la sociedad esta-

dounidense, y el paralelo desmantelamiento de las organizaciones populares, han instaurado la violencia más descarnada –abierta u oculta pero igualmente violenta– como la forma normal de las relaciones sociales. Este deterioro es, sin duda, resultado de una verdadera y apenas declarada “guerra social” que, librada por el neoliberalismo, conduce al progresivo exterminio de los pobres bajo variadas formas: principalmente a través de masivos encarcelamientos, como en Estados Unidos; con un “suave” genocidio económico, como en el África subsahariana; o por medio de la exclusión social y económica, como en la mayoría de los países de América Latina. En vez de combatir la pobreza, observaba con ironía Noam Chomsky, los gobiernos neoliberales se han dedicado a combatir a los pobres. De ahí la verdadera “privatización” de la violencia a la que asistimos actualmente en la mayoría de los países capitalistas, en donde un verdadero ejército de guardias privados tiene a su cargo la custodia de los ricos, mientras un número creciente de indigentes carece de lo más elemental para asegurar su sustento y es mantenido a raya por la creciente militarización de nuestras sociedades y la criminalización de las protestas sociales. Este cuadro, unido a la crisis fiscal del estado y a la deserción de sus obligaciones fundamentales, que entre otras cosas hace que no se pueda financiar algo tan elemental para la convivencia civilizada como la administración de justicia, precipitó el florecimiento de diversas prácticas tendientes a “hacer justicia por mano propia”, en un abanico que va desde el “justiciero” de clase media, que se siente moralmente autorizado a balear a un adolescente marginal que intenta robar la radio de su auto, hasta el “linchamiento” popular detonado por la indiferencia de la justicia ante la suerte de los más pobres, pasando por numerosas formas intermedias.

EL ATAQUE A LA DEMOCRACIA

El tercer y último aspecto que quisiéramos examinar en estas páginas es el relativo al debilitamiento sufrido por nuestros países a causa del efecto corrosivo de las políticas del Consenso de Washington. Estas, lejos de haber consolidado nuestras nacientes democracias, operaron en un sentido exactamente inverso, y las consecuencias las estamos pagando hoy. Es por eso que, luego de un período de casi dos décadas, los logros de los capitalismo democráticos latinoamericanos no lucen como demasiado excitantes ni atractivos. Nuestras sociedades actuales son más desiguales e injustas que las que las precedieran. Si entre

1945 y 1980 los países latinoamericanos experimentaron un módico progreso en dirección de una cierta igualdad social, y si en ese mismo período una diversidad de regímenes políticos, desde variantes del populismo hasta algunas modalidades de “desarrollismo”, se las ingeniaron para sentar las bases de una política que, en algunos países, fue agresivamente “inclusionista” y tendiente a “ciudadanizar” a grandes sectores de nuestras sociedades otrora privados de todo derecho, el período que se inicia a partir de la crisis de la deuda tiene un signo manifiestamente contrario. Se cancela una tendencia y se inicia otra, en sentido exactamente contrario al anterior. En esta nueva fase, celebrada como la definitiva reconciliación de nuestros países con los inexorables imperativos de los mercados globalizados, viejos derechos –como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social– fueron abruptamente “mercantilizados” y convertidos en inalcanzables mercancías, lanzando a grandes masas de nuestras sociedades a la pobreza y la indigencia. Las precarias redes de solidaridad social fueron demolidas al compás de la fragmentación social ocasionada por las políticas económicas ortodoxas y el desenfrenado individualismo promovido por los nuevos valores dominantes que proyectaban los “amos del mercado” tanto como por la dirigencia política que comandaba estos procesos. Más aún, los actores colectivos y las fuerzas sociales que en el pasado canalizaron las aspiraciones y las demandas de las clases y capas populares –los sindicatos, los partidos populistas y de izquierda, las asociaciones populares, etc.– fueron desorganizados y debilitados o simplemente barridos de la escena. De este modo, los ciudadanos de nuestras democracias se vieron atrapados por una situación paradójica: mientras que en el “cielo” ideológico del nuevo capitalismo democrático se exaltaban la soberanía popular y el amplio repertorio de derechos consagrados constitucionalmente, en la prosaica “tierra” del mercado y la sociedad civil los ciudadanos eran despojados prolijamente de esos derechos por medio de crueles y acelerados procesos de “desciudadanización” que los marginaban y excluían de los beneficios del progreso económico y convertían a la democracia en un simulacro vacío.

En nuestros países, en suma, la democracia corre el riesgo de ser ese “casarón vacío” del que tantas veces ha hablado Nelson Mandela, en donde medra una clase política cada vez más irresponsable y corrupta, indiferente ante el bien común y los intereses de la ciudadanía. Que esto ya es así lo demuestra la enorme desconfianza popular ante la clase política, los partidos y los parlamentos, un fenó-

meno que se registra en cada uno de los países de la región, si bien en no todos los casos con similar intensidad.

No debería sorprendernos, en consecuencia, encontrar que los resultados de las encuestas de opinión pública en América Latina demuestran altos niveles de insatisfacción con el desempeño de nuestros regímenes democráticos. Mediciones recientes hechas por Latinobarómetro han arrojado resultados sumamente preocupantes: si en 1997 el 41% de la población de la región (cerca de 19 mil personas en dieciocho países) se declaraba satisfecho con la democracia, en 2001 esta proporción descendió al 25%, para incrementarse sólo un poco en 2004, cuando la proporción ascendió al 29%. Entonces, para el período 1997-2004 hubo una caída de 12 puntos porcentuales en la satisfacción con la democracia en América Latina, un descenso cuya significación es potenciada por el hecho de que el punto de comparación, el año 1997, estuvo lejos de ser muy alentador. Solamente tres países se desviaron de esta tendencia descendente: Venezuela, donde el porcentaje de la población que se declaró satisfecha con el régimen democrático se incrementó en 7 puntos, y Brasil y Chile, donde la proporción aumentó 3 y 5 puntos porcentuales respectivamente.

En términos más generales, podría decirse que lo que ocurre es que, en el nuevo contexto ideológico signado por el primado del neoliberalismo, la participación ciudadana en la cosa pública fue sistemática y sutilmente desalentada. La “norteamericanización” de la política latinoamericana, visible en el formato –y la vaciedad– de las campañas políticas, la dilución ideológica de la competencia electoral, la obsesión de los grandes partidos por ocupar el centro del espectro ideológico, y el primado de la videopolítica, con sus insulsos discursos y sus rebuscados estilos publicitarios, también se deja sentir en la persistente promoción de la indiferencia y la apatía políticas promovidas por la lógica del mercado. Estas últimas son típicas de la vida pública de EE.UU. y, lejos de ser rasgos circunstanciales, obedecen al diseño constitucional forjado por los padres fundadores de la Constitución norteamericana, que no ahorraron argumentos para desalentar, o impedir, la participación de la plebe en los asuntos públicos. Así, EE.UU. es el único país del mundo en el que las elecciones –presidenciales, legislativas o de gobernadores– se realizan en días laborales, no hay feriado que facilite la participación ciudadana en el acto electoral. El otro gran caso es el Reino Unido, no precisamente reconocido por la fuerza de sus instituciones democráticas. En el caso latinoamericano, el desaliento a la participación política tiene

que ver, en primer lugar, con el descrédito y la ignominia por todo lo perteneciente a la esfera pública, como el estado y el proceso político. La propaganda neoliberal ha cosechado un gran éxito en sus esfuerzos adoctrinadores al hacer que la esfera pública, muy especialmente el estado, sea percibida como un ámbito en donde prevalecen la corrupción, la venalidad, la irresponsabilidad y la demagogia. Un lugar, en síntesis, en el que ninguna persona honesta debería preocuparse por estar. Este proceso contrasta vivamente con la simétrica exaltación de las virtudes del mercado –una esfera pura donde la naturaleza egoísta de los hombres y mujeres es sublimada y convertida en inagotables fuerzas de creatividad y progreso material– y de la sociedad civil, concebida esta en la pureza de la propaganda neoliberal como un territorio neutral sin ninguna de las diferenciaciones clasistas, sexistas y racistas que la marcan indeleblemente en los capitalismo contemporáneos (Meiksins Wood, 1995).

A los anteriores factores de apatía e indiferencia habría que agregar dos consideraciones adicionales: el hecho de que las estrategias colectivistas de intervención política hayan caído igualmente en desgracia en favor del acérrimo individualismo que prevalece en los mercados, y la banalización de la política y de las instancias participativas de la ciudadanía –ejemplificados en la dictadura de los mercados y en el hecho de que estos, como lo recordaba George Soros, “votan todos los días”–, lo que terminó por ahuyentar a los ciudadanos de los comicios y promover la “privatización” de sus actividades. Si todos los partidos elaboran un mismo discurso, si todos pretenden captar un supuesto “centro” político e ideológico, si nadie quiere diferenciarse y exponerse a la condena de los “dueños del dinero”, y si todos se empeñan en gobernar en función de los dictados del mercado, ¿para qué molestarse en buscar información, registrarse e ir a votar?

En suma: difícilmente podría sostenerse que un “paraíso neoliberal” de las características que conocemos en nuestra región sea demasiado propenso al desarrollo de una sociedad integrada y sin exclusiones, o al sostenimiento de la democracia política y la participación ciudadana en la vida pública. Más bien parecería ser el escenario propicio para el resurgimiento de nuevas formas de despotismo político. En consecuencia, las insustanciales democracias de América Latina están sufriendo los embates no ya de las “reformas orientadas al mercado”, como eufemísticamente se las llama, sino de una auténtica contrarreforma social dispuesta a llegar a cualquier extremo con tal de preservar y reproducir las estructuras de la desigualdad social y

económica de nuestra región, con todos los privilegios que estas representan para los grupos dominantes. Esta contrarreforma tiene por objetivo declarado hacer que los rigores del mercado actúen como incentivos para motivar conductas supuestamente más racionales e innovadoras de los agentes económicos. Esta es la línea fundamental de los razonamientos de F. von Hayek y su intransigente prédica en contra del igualitarismo y el colectivismo. En sus propias palabras, “la desigualdad, insoportable para tantos, ha sido necesaria para lograr el nivel de rentas relativamente alto de que hoy disfrutan en Occidente la mayoría de las personas” (Hayek, 1944: 27). Por eso no cabe la menor duda de que, tal como lo ha observado Gosta Esping-Andersen (1990: 22) en repetidas ocasiones, un buen indicador de la mayor o menor justicia social existente en un país está dado por el grado de “desmercantilización” de la oferta de bienes y servicios básicos requeridos para satisfacer las necesidades de los hombres y mujeres concretos que constituyen una comunidad. La “desmercantilización” significa que una persona puede sobrevivir sin depender de los caprichosos movimientos del mercado y, como Esping-Andersen nota, “fortalece al trabajador y debilita la autoridad absoluta de los empleadores. Esta es, exactamente, la razón por la cual los empleadores siempre se opusieron a ella”. Allí donde la provisión de la educación, la salud, la vivienda, la recreación y la seguridad social –para citar las instancias más corrientes– se encuentre liberada de los sesgos clasistas y excluyentes introducidos por el mercado, será posible contemplar los contornos de una sociedad más justa y de una democracia más robusta. La otra cara de la “mercantilización” es la exclusión, porque ella significa que sólo quienes tienen dinero suficiente podrán adquirir bienes y servicios que en otras sociedades son inherentes a la condición ciudadana. Por el contrario, sociedades con un desigual acceso de sus habitantes a bienes y servicios básicos en función de sus recursos económicos –es decir, ya no más concebidos como derechos ciudadanos de universal adjudicación– tropezarán con la injusticia y todo el repertorio de sus aberrantes manifestaciones: indigencia y pobreza, desintegración social y anomia, ignorancia, enfermedad y las múltiples formas de la opresión con sus deplorables secuelas.

Los países escandinavos y América Latina muestran los contrastantes alcances de esta dicotomía: por una parte, una ciudadanía política efectiva que se asienta sobre la universalidad del acceso a bienes y servicios básicos concebidos como una suerte de innegociable “salario del ciudadano” ya incorporado al “contrato social” de los países nórdi-

cos y, de manera un tanto más diluida, al de las formaciones sociales europeas en general. El “salario del ciudadano” significa, en buenas cuentas, un certificado en contra de la exclusión social porque garantiza, por la vía política e institucional, el disfrute de ciertos bienes y servicios que, ante la ausencia de tal política pública, deben adquirir en el mercado aquellos sectores cuyos ingresos los facultan a ello (Bowles y Gintis, 1982). Por el contrario, las democracias latinoamericanas, con su mezcla de inconsecuentes procesos de ciudadanía política cabalgando sobre una creciente “desciudadanización económica y social”, culminan en una ciudadanía formal y fetichizada, vaciada de contenido sustantivo y segura fuente de futuros despotismos. De ahí que al cabo de tantos años de transiciones democráticas tengamos democracias sin ciudadanos, o democracias de libre mercado, cuyo objetivo supremo es garantizar la ganancia de las clases dominantes y no el bienestar de la ciudadanía.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Quisiéramos concluir esta revisión panorámica de la reciente historia latinoamericana con algunos interrogantes y algunas propuestas.

En primer lugar, conviene recordar las palabras de Walter Benjamin cuando dijera que “no hay síntoma más serio de la gravedad de la crisis que las cosas sigan como están”. Pero, ¿seguirán como están? La coalición neoliberal en América Latina ha probado ser extraordinariamente poderosa e influyente. Las perspectivas de cambio que se abrieron con el ascenso del PT a la presidencia de Brasil en las elecciones presidenciales de 2002 parecen haberse diluido, toda vez que las políticas económicas implementadas por el gobierno Lula se inscriben dentro de los parámetros del Consenso de Washington.

El efecto-demostración de Brasil era importantísimo para potenciar la elaboración de políticas post-neoliberales en los otros países de la región. Pero el chantaje imperialista, unido a la extorsión interna que practican los “señores del dinero” y sus permanentes amenazas de producir un “golpe de mercado” o de promover una “huelga de inversiones” en Brasil, parece haber logrado poner de rodillas a un gobierno que llegó al Planalto rodeado de una inmensa legitimidad popular y que, poco tiempo después, adoptó un curso de acción animado por la suicida obsesión de pretender “tranquilizar a los mercados”. Ese y no otro fue el principio cardinal que orientó la política del gobierno de la Alianza en Argentina, y que condujo a su presidente, Fernando de la

Rúa, a un final apocalíptico y sangriento. Esta lección parece no haber sido aprendida por los actuales gobernantes brasileños.

Al momento de escribir estas líneas, la capitulación del gobierno de Lula es imposible de esconder, poniendo contra las cuerdas el futuro de las políticas post-neoliberales en América Latina. En efecto, el PT es el primer partido que se hizo cargo del gobierno después del diluvio neoliberal, con el mandato de poner en marcha un programa post-neoliberal de reconstrucción económica y social. En Argentina, siempre pionera en materia de infortunios, el derrumbe del neoliberalismo se consumó mucho antes pero su alternativa política aún no pudo constituirse. La tradicional incapacidad de los sectores de la izquierda y centro-izquierda para constituir una coalición reformista sería que ponga coto a las ambiciones de la derecha conspiró en contra de la construcción de dicha alternativa. En el caso de Brasil, en cambio, su gravitación internacional, su enorme extensión geográfica, el tamaño de su población y la complejidad de su estructura económica hacen que un presidente instalado en Brasilia cuente con un margen de maniobra inimaginable para cualquier otro de la región. Si Brasil no puede liberarse a sí mismo de la trampa neoliberal, ¿quién podría hacerlo?

Ahora bien, en caso de que la experiencia de Lula no concluyera como se espera, y teniendo en cuenta la indudable gravitación de Brasil en toda América Latina, parecería pertinente preguntarnos hasta qué punto este tipo de sociedad, que emerge tras el diluvio neoliberal, puede ser el sostén histórico de un proceso de democratización, o la plataforma desde la cual se construya una convivencia civilizada y respetuosa de los derechos fundamentales de la persona humana. ¿No deberíamos más bien esperar el surgimiento de fuertes tendencias hacia el mesianismo político o hacia un fundamentalismo de derecha en caso de que los agentes de cambio y las fuerzas populares fracasasen en su empeño por cambiar el rumbo de la historia? ¿No estaremos, acaso, en presencia de un ominoso huevo de la serpiente neofascista?

A la luz de las demandas populares a favor de una agenda post-neoliberal, los publicitarios de la derecha insisten en la “inexistencia de alternativas”. Estamos condenados a esto, nos dicen. Si un gobierno presta oídos sordos a este imperativo, caerá en la trampa de un peligroso voluntarismo que se ilusiona con doblegar a las fuerzas inexpugnables de la globalización. Es más, los liberales no se cansan de plantear a sus adversarios la siguiente pregunta: ¿cuál es su modelo alternativo al de libre mercado?

En primer lugar, es preciso rechazar de plano el supuesto de que para salir de la crisis actual es necesario contar con un modelo altamente elaborado en el plano de la teoría. Esto jamás ha ocurrido en la historia económica internacional. No ocurrió con el keynesianismo, cuya codificación fue posterior, y no anterior, a la extensiva reestructuración de los estados capitalistas tras 1929 y a la adopción de las nuevas políticas de intervención estatal puestas en marcha por los gobiernos antes de que en 1936 apareciera la “Teoría General” de Keynes. Tampoco ocurrió con el neoliberalismo, cuyas políticas, si bien se inspiraron en los axiomas básicos de la producción teórica de Milton Friedman y Friedrich von Hayek, tuvieron más que ver con las iniciativas concretas tomadas por los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en EE.UU., a comienzos de la década del ochenta, que con los postulados de una secta esotérica que año tras año se reunía casi clandestinamente en Mount Pellerin, Suiza (Anderson, 2004).

En segundo lugar, dado lo anterior, es posible establecer algunas orientaciones básicas de lo que debería ser una política post-neoliberal. Esta política debe incluir entre sus componentes clave lo siguiente:

Reconstrucción del estado. Es completamente ilusorio pensar que una solución a la presente crisis puede alcanzarse sin una completa reconstrucción del estado. Esto implica tomar algunas iniciativas concretas, entre las cuales se destacan:

- el fortalecimiento fiscal del estado. Un estado pobre, carente de recursos, no puede desempeñar un papel positivo en la resolución de la crisis y sólo contribuye a agravarla;
- la jerarquización de la administración pública. No hay estado eficiente y operativo con servidores públicos mal pagos y carentes de reconocimiento social;
- la realización de una profunda reforma en los aparatos administrativos y burocráticos, y en la organización general del estado, tendiente a reforzar sus capacidades frente a los nuevos e impostergables desafíos de nuestra época;
- la lucha frontal contra la corrupción, porque un estado corrupto poco y nada puede hacer, salvo enriquecer aún más a quienes ya son ricos y corromper a los funcionarios estatales;
- la redefinición de una nueva estrategia de intervención del estado en la vida económica y social, a partir de la constatación del hecho de que las viejas modalidades e instrumentos

propios de la era keynesiana requieren urgentes e imprescindibles modificaciones;

- la mejora de los mecanismos de funcionamiento estatal, a fin de posibilitar la mayor transparencia y control ciudadano del proceso de toma de decisiones. Una experiencia digna de tener en cuenta es la del presupuesto participativo, implementada por el PT en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

Reforma tributaria. Todas las anteriores medidas remiten, en última instancia, a la “madre de todas las batallas”: la reforma tributaria. En efecto, ninguna reforma del estado digna de ese nombre será posible en los estados latinoamericanos sin cortar de raíz la Hidra de las Siete Cabezas del “veto contributivo”, un privilegio perpetuado en el tiempo que hasta hoy ejercen las clases dominantes sin remordimientos. Sin atacar esta pesada herencia que proviene de la época colonial –¡los conquistadores y colonizadores no debían pagar impuestos, sino recibir tributos de los nativos!–, no habrá estado dotado de las capacidades mínimas necesarias para enfrentar las tareas demandadas para salir de la crisis. Esto supone, entonces, acabar con tan perversa tradición que disfrutaban los ricos y las grandes empresas, situación tan escandalosa que hasta los más moderados estudios, declaraciones políticas e informes de economistas convencionales parecen ser panfletos ultra izquierdistas más que documentos elaborados por expertos objetivos. La lucha contra esta lacra social presupone asimismo un combate contra la evasión y la elusión tributaria, y el diseño de una estructura impositiva que abandone la radical regresividad actual y la sustituya por un modelo de tributación progresiva. No es una meta descabellada proponer que, en un plazo de cinco años, la estructura tributaria de nuestros países adopte parámetros similares –no iguales, pero similares– a los que se registran en promedio en los países menos desarrollados de la Unión Europea, como Grecia y Portugal. Si no se hace, es sencillamente porque falta la voluntad política entre nuestros gobernantes para garantizar que en este mundo globalizado las empresas europeas, norteamericanas y japonesas paguen impuestos aproximadamente semejantes a los que abonan sin chistar en sus propios países.

Reforma de las instituciones democráticas. Un programa postneoliberal exige, en tercer lugar, poner en marcha una profunda

reforma política que perfeccione radicalmente la calidad de nuestras instituciones y prácticas democráticas. Esto requiere la creación de mejores reglas, agencias e instituciones capaces de trasladar efectivamente la soberanía popular a las decisiones políticas, una condición *sine qua non* de cualquier régimen democrático. Por ejemplo, afinar instrumentos tales como el referéndum, el plebiscito y la consulta popular, haciéndolos frecuentemente operativos; mejorar los sistemas de representación política; prevenir que los representantes sean “secuestrados” por los grandes intereses comerciales; hacer que las legislaturas sean mucho más receptivas ante las demandas ciudadanas; instituir la revocabilidad de los mandatos; imaginar mecanismos que faciliten una mejor selección de los dirigentes de los partidos políticos; y otras medidas similares que potencien el control democrático y “desde abajo” de los procesos de formación de la decisión pública. Sin esta reforma, que apunta a un irreversible proceso de socialización del poder político, no habrá solución para nuestra crisis.

Financiamiento público de la vida política. Para alcanzar todo lo mencionado anteriormente, resulta imprescindible, en consecuencia, emancipar a la política de los mercados. En nuestros días, la política es financiada por las empresas y por los sectores adinerados. El resultado, Gore Vidal observa, es que la política democrática, o lo que pretende ser política democrática, ha sido cooptada por las fuerzas del mercado. La política se ha convertido, en esta “era mass-mediática”, en una actividad sumamente onerosa que en nuestros países financian, no sin esperar fabulosas recompensas, los ricos y poderosos. No es sino natural que, una vez elegidas, las nuevas autoridades “democráticamente electas” gobiernen en exclusivo provecho de sus mandantes y financistas, sin cuyos financiamientos las costosas campañas políticas nunca habrían podido ser costeadas. Si los gobernantes electos tuvieran un improbable ataque de amnesia, algún que otro oportuno “golpe de mercado” les refrescaría la memoria inmediatamente, recordándoles que en las presentes circunstancias ellos son poco más que serviles mayordomos de los amos capitalistas.

Acceso universal a los medios. Si el financiamiento público y transparente de la vida política se constituye en un dato funda-

mental del nuevo ordenamiento democrático, el acceso irrestricto a los medios de comunicación de masas es el otro pilar de una democracia perfeccionada. Actualmente, la vida política está ampliamente moldeada, sin ningún contrapeso relevante, por los medios de comunicación. Y los medios son una de las franjas más extremadamente concentradas de la economía mundial, comparable con los sistemas bancarios y de seguros. “Libertad de prensa” significa, en casi todas partes y en todos los tiempos, libertad para sacar provecho manipulando la opinión pública en un modo que refuerza la estructura de dominación preexistente. Pero nuestras poblaciones no son libres para nada al momento de demandar información completa, justa y equilibrada. La libertad es para las firmas, no para el público. Ambas cosas, financiamiento público de la vida política e información completa, justa y equilibrada, suponen la existencia de un estado dotado de recursos suficientes para hacer el trabajo. Y aquí vemos cómo se cierra perfectamente bien el círculo de la dominación plutocrática: se exige la reducción del gasto público y de la “carga impositiva”. Como resultado, un estado débil no puede financiar pública y transparentemente la vida política ni garantizar información confiable para todos, con lo cual todo pasa a ser en beneficio de las clases dominantes, las únicas que cuentan con el dinero para financiar campañas políticas y quienes también controlan los medios masivos de comunicación.

Desmercantilización. Por último, lo anterior requiere inexorablemente la puesta en vigor de nuevas políticas estatales orientadas a la provisión de un conjunto de bienes públicos que en épocas recientes sufrieron agudos procesos de “mercantilización”. Ese y no otro fue el camino recorrido por las naciones europeas en la segunda posguerra, un camino que permitió, en un mundo devastado por el conflicto bélico, la reconstrucción de la economía y la sociedad civil. Estas nuevas políticas públicas, completamente antitéticas en relación a las emanadas del Consenso de Washington, no sólo representan un fin noble en sí mismas sino que, además, constituyen un aporte fundamental para la reconstrucción de una sólida legitimidad democrática, que a su vez es imprescindible para dotar al estado de la fortaleza requerida para disciplinar a las fuerzas del mercado, encuadrar a los grandes capitales y neutralizar la presión del imperialismo y de otros

estados más poderosos. Un estado, en una palabra, que recupere la soberanía económica y política perdida, que perfeccione la calidad del orden democrático y que permita emprender la impostergable reconstrucción de la sociedad civil después del diluvio neoliberal.

Quisiera terminar estas líneas recordando las sabias palabras de Bertolt Brecht con las cuales iniciáramos este artículo. Ellas son más apropiadas que nunca para orientar nuestra práctica en tiempos como estos. Si, como Marx propuso en la novena tesis sobre Feuerbach, queremos cambiar el mundo y no sólo contemplarlo o interpretarlo, el punto de partida es ser totalmente intransigentes en nuestro rechazo de la barbarie que el capitalismo como modo de producción ha impuesto a la humanidad. Estas líneas pretenden, dentro de sus modestos límites, subrayar las profundas bases humanísticas y éticas de nuestra intransigencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, Perry 2004 “El papel de las ideas en la construcción de alternativas” en Boron, Atilio A. (comp.) *Nueva Hegemonía Mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales* (Buenos Aires: CLACSO).
- Boron, Atilio A. 2000 *Tras el Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Boron, Atilio A. 2002 *Imperio & Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri* (Buenos Aires: CLACSO).
- Boron, Atilio A. 2003a “Poder, ‘contra-poder’ y ‘antipoder’”. Notas sobre un extravío teórico político en el pensamiento crítico contemporáneo” en *Chiapas* (Buenos Aires/México) N° 15, agosto.
- Boron, Atilio A. 2003b “La sociedad civil después del diluvio neoliberal” en Sader, Emir y Gentili, Pablo (comps.) *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social* (Buenos Aires: CLACSO/EUDEBA).
- Bowles, Samuel and Gintis, Herbert 1982 “The Crisis of Liberal Democratic Capitalism: The Case of the United States” in *Politics and Society*, Vol. II, N° 1.
- Bresser Pereira, Luiz Carlos; Maravall, José M. and Przeworski, Adam 1993 *Economic Reforms in New Democracies. A Social-Democratic Approach* (Cambridge: Cambridge University Press).
- CEPAL 2002 *Anuario estadístico 2002* (Santiago de Chile).
- Cueva, Agustín 1979 “Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia” en *Teoría social y procesos políticos en América Latina* (México: Edicol, Línea Crítica).
- Drucker, Peter 1997 “The Global Economy and the Nation State” in *Foreign Affairs*, Vol. 76, N° 5, September-October.

- Edwards, Sebastián 1997 *Crisis y reforma en América Latina* (Buenos Aires: Emecé).
- Esping-Andersen, Gosta 1990 *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (Princeton: Princeton University Press).
- Evans, Peter B.; Rueschemeyer, Dietrich and Skocpol, Theda (eds.) 1985 *Bringing the State Back In* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Hardt, Michael and Negri, Antonio 2000 *Empire* (Cambridge: Harvard University Press).
- Hayek, Friedrich A. von 1944 *The Road to Serfdom* (Chicago: The University of Chicago Press).
- Holloway, John 2002 *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy* (Buenos Aires: Universidad Autónoma de Puebla/Herramienta).
- Keynes, John M. 1926 “The end of *laissez-faire*” in *Essays in Persuasion* (New York and London: W. W. Norton & Company).
- Keynes, John M. 1936 *The General Theory of Employment, Interest and Money* (New York and London: W. W. Norton & Company).
- Latinobarómetro 2001 <www.latinobarometro.org/ano2001>.
- Meiksins Wood, Ellen 1995 *Democracy against Capitalism: Renewing Historical Materialism* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Negri, Antonio 1978 “Keynes and the capitalist theory of the state in 1929” en *La classe ouvrière contre l'état* (Paris: Galilée).
- Polanyi, Karl 1944 *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press).
- Prebisch, Raúl 1982 “El retorno de la ortodoxia” en *Pensamiento Iberoamericano* (México) Vol.1, N° 1.
- Sader, Emir (comp.) 1996 “Um governo de (contra)reformas” em *O Brasil do Real* (Rio de Janeiro: EDUERJ).
- Sousa Santos, Boaventura de 2005 *Reinventar la democracia. Reinventar el estado* (Buenos Aires: CLACSO).
- Stiglitz, Joseph 1998 “Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. Hacia el consenso post-Washington” en *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales* (Buenos Aires) Vol. 38, N° 151, octubre-diciembre.
- Stiglitz, Joseph 2000 “What I Learned at the World Economic Crisis” in *The New Republic*, April 17th.
- Stiglitz, Joseph 2002 *Globalization and Its Discontents* (New York and London: W. W. Norton & Company).
- Strange, Susan 1986 *Capitalism Casino* (Oxford: Blackwell).
- Torre, Juan C. 1998 *El proceso político de las reformas en América Latina* (Buenos Aires: Paidós).
- Ziccardi, Alicia (comp.) 2002 *Pobreza y políticas sociales en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).